

Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19

TRADUCCIÓN NO OFICIAL*

Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹

1. Se espera que una vacuna segura y efectiva reduzca los riesgos que la COVID-19 plantea para la salud y la vida, permitiendo, al mismo tiempo, el levantamiento progresivo de algunas de las medidas restrictivas que han sido necesarias para hacer frente a la propagación del virus. También ayudará a recuperarse de los graves efectos negativos que estas medidas han tenido en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de las poblaciones

* Nota del editor. Esta traducción fue elaborada por Dejusticia con el fin de contribuir a la difusión de un documento que consideramos de relevancia pública. No es una traducción oficial de Naciones Unidas. Todos los errores son nuestros

1 Esta declaración fue adoptada por el Comité el 27 de noviembre de 2020.

más desfavorecidas y marginadas. Por ello, es una noticia importante y alentadora para el mundo que varias vacunas contra la COVID-19 puedan ser aprobadas pronto por las autoridades sanitarias, después de haber seguido los documentos de orientación técnica pertinentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las vacunas contra la COVID-19 y otros productos biológicos a fin de garantizar su seguridad y eficacia.² En ese contexto, el Comité considera necesario recordarles a los Estados partes de la obligación que les incumbe en virtud del Pacto en esta esfera, a fin de evitar la discriminación y las desigualdades injustificadas en el acceso a las vacunas contra la COVID-19.³

2. Todas las personas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental,⁴ incluyendo el acceso a “programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas”.⁵ Todas las personas también tienen derecho a gozar de los beneficios del progreso científico,⁶ incluyendo el acceso a “las mejores aplicaciones disponibles del progreso científico necesarias para disfrutar del más alto nivel posible de salud”.⁷ Ambos derechos implican que todas las personas tienen el derecho a acceder a una vacuna contra la COVID-19

2 <https://www.who.int/publications/m/item/relevant-who-tech-docs-for-covid-19-vaccines-and-other-biologicals>

3 Para una visión general de las obligaciones de los Estados partes en virtud del Pacto en relación con la pandemia, véase la Declaración del Comité del 17 de abril de 2020 “Sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales”.

4 Véase el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

5 Véase la Observación General No. 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Párrafo 36.

6 Véase el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

7 Véase la Observación General No. 25 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales. Párrafo 70.

que sea segura, efectiva y esté basada en la aplicación de los mejores desarrollos científicos.

3. Los Estados tienen la obligación de tomar todas las medidas que sean necesarias, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para garantizar que todas las personas tengan acceso a vacunas contra la COVID-19 sin discriminación.⁸ El deber de los Estados de proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas y prevenir y combatir las enfermedades epidémicas es una obligación de prioridad relativa al derecho a la salud.⁹ Por consiguiente, en las condiciones actuales, los Estados tienen que dar la máxima prioridad al suministro de vacunas contra la COVID-19 a todas las personas.
4. El derecho a la salud requiere que los Estados hagan que las instalaciones, servicios y bienes de la salud, incluidas las vacunas, estén disponibles, sean accesibles, aceptables y de buena calidad.¹⁰ Las vacunas contra la COVID-19 no sólo deben ser producidas y puestas a disposición, sino que también deben ser accesibles para todas las personas. Para asegurar el acceso a las vacunas contra la COVID-19, los Estados deben:¹¹ primero, eliminar toda discriminación basada en motivos de religión, nacionalidad, sexo, orientación sexual e identidad de género, raza e identidad étnica, edad, discapacidad, condición de migrante indocumentado, origen social, pobreza o cualquier otra condición pertinente. Segundo, garantizar la accesibilidad física a las vacunas, especialmente para los grupos marginados y las personas que viven en áreas remotas, utilizando tanto los canales estatales como los privados

8 Véase los Artículos 2, 12 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

9 Véase la Observación General No. 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Párrafo 44.

10 Véase la Observación General No. 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Párrafo 12.

11 Véase la Observación General No. 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Párrafo 12

y mediante el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas de salud para suministrar vacunas. En tercer lugar, garantizar la asequibilidad o la accesibilidad económica para todos, incluso mediante el suministro de vacunas gratuitas, al menos para las personas de ingresos más bajos y los pobres. En cuarto lugar, garantizar el acceso a la información pertinente, especialmente mediante la difusión de información científica exacta sobre la seguridad y la eficacia de las diferentes vacunas y campañas públicas que protejan a las personas contra la información falsa, engañosa o seudocientífica relativa a las vacunas,¹² que se está difundiendo rápidamente en los sitios de Internet y las redes sociales.

5. Es imposible garantizar que todo el mundo tenga acceso inmediato a una vacuna contra la COVID-19, incluso si varias vacunas se aprueban pronto. La producción en masa y la distribución de las vacunas implica no solo enormes costos financieros, sino también complejos procedimientos administrativos y sanitarios. La priorización del acceso a las vacunas por grupos específicos es inevitable, al menos en las etapas iniciales, no solo a nivel nacional sino internacional. De conformidad con la prohibición general de la discriminación,¹³ esa priorización debe basarse en las necesidades médicas y en motivos de salud pública. En virtud de estos criterios, puede darse prioridad, por ejemplo, a los trabajadores de la salud y de cuidado, o a las personas que presenten mayores riesgos de desarrollar una afección grave de salud en caso de infección con SARS-COV-2 debido a su edad o condiciones preexistentes, o a las que estén más expuestas y vulnerables al SARS-COV-2 debido a determinantes sociales de la salud, como las personas que viven en asentamientos informales o en otras formas de vivienda densa o inestable, personas en condición de pobreza, pueblos indígenas, minorías racializadas, migrantes, refugiados, personas desplazadas, personas

12 Véase la Observación General No. 25 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la Ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales, párrafo 52.

13 Véase el Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Véase la Observación General No. 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2009) sobre la “No Discriminación en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

privadas de libertad y otras poblaciones marginadas y desfavorecidas. En todo caso, estos criterios de priorización deben establecerse mediante un proceso de consulta pública adecuada, ser transparentes y estar sujetos al escrutinio público y, en caso de que surjan controversias, a una revisión judicial para evitar la discriminación.

6. Muchas de las vacunas que pueden ser aprobadas fueron desarrolladas por empresas privadas y pueden estar sujetas al régimen de propiedad intelectual. Estas compañías esperan obtener ganancias y es justo que reciban una compensación razonable por sus inversiones e investigación. No obstante, el Comité recuerda a los Estados partes que la propiedad intelectual no es un derecho humano sino un producto social que tiene una función social.¹⁴ En consecuencia, los Estados partes tienen el deber de prevenir que los regímenes jurídicos de propiedad intelectual y patentes menoscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, haciendo que bienes públicos esenciales como las vacunas o los medicamentos sean inaccesibles para los países en desarrollo o a las comunidades empobrecidas debido a estructuras de costos poco razonables.¹⁵ Así pues, como se afirma en la Declaración de Doha de la Organización Mundial del Comercio relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud Pública (2001), el régimen de propiedad intelectual debe interpretarse y aplicarse de manera que apoye el deber de los Estados de “proteger la salud pública”.¹⁶ Los Estados

14 Véase la Observación General No. 17 (2006) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a)”. Párrafos 1 y 2.

15 Véase la Observación General No. 17 (2006) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a)”. Párrafo 35.

16 Véase la Observación General No. 25 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2020) sobre La ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales, Párrafo 69.

partes deben utilizar, siempre que sea necesario, todas las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, como las licencias obligatorias, para garantizar que todos tengan acceso a la vacuna contra la COVID-19. No obstante, es muy probable que estas flexibilidades sean insuficientes para hacer frente adecuadamente a la pandemia, especialmente en los países en desarrollo. Por consiguiente, como medida adicional, algunos Estados han propuesto a la OMC¹⁷ renunciar a algunas de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el contexto de esta crisis sanitaria mundial. Esta propuesta, que cuenta con el apoyo de varios procedimientos especiales de los sistemas de derechos humanos de las Naciones Unidas,¹⁸ debería examinarse y aplicarse a fin de facilitar la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19, mediante la asequibilidad de las vacunas a nivel mundial.

7. De conformidad con los estándares internacionales, las entidades comerciales, incluidas las empresas farmacéuticas, tienen la obligación, como mínimo, de respetar los derechos del Pacto.¹⁹ Por tanto, las entidades comerciales deberían abstenerse de invocar los derechos de propiedad intelectual de manera incompatible con el derecho de toda persona a acceder a una vacuna segura y eficaz contra la COVID-19 y con la obligación de los Estados de garantizar, lo antes posible, el acceso universal equitativo a las vacunas contra la COVID-19.
8. Bajo el Pacto, los Estados partes pueden ser considerados directamente responsables por la acción o inacción de las entidades comerciales

17 Véase la Declaración de Sudáfrica en el Consejo sobre los ADPIC de la OMC, 30 de julio de 2020 <https://www.keonilne.org/33593>

18 Declaración de un grupo de Procedimientos Especiales sobre el acceso universal a la vacuna: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26484&LangID=E>

19 Véase la Observación General No. 24 (2017) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades Empresariales” Párrafo 5 y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Principio 11.

bajo ciertas circunstancias.²⁰ Además, tienen la obligación extraterritorial de adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos económicos, sociales y culturales tomando las medidas necesarias para garantizar que las empresas domiciliadas en su territorio y/o bajo su jurisdicción no violen esos derechos en el extranjero.²¹ Por lo tanto, los Estados deberían adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que esas entidades comerciales no invoquen el derecho de propiedad intelectual, ya sea en su propio territorio o en el extranjero, de manera incompatible con el derecho de toda persona a acceder a una vacuna segura y eficaz contra la COVID-19.

9. Bajo el Pacto, los Estados tienen un deber de cooperación y asistencia internacional para garantizar un acceso universal y equitativo a vacunas siempre que se necesiten.²² La naturaleza pandémica de la COVID-19 refuerza esta obligación de los Estados.²³ En consecuencia, los Estados deben fortalecer su cooperación internacional para garantizar, tan pronto como sea posible, el acceso universal y equitativo a vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo, incluyendo para las poblaciones de los países menos desarrollados que tal vez no dispongan de los recursos financieros para garantizar el acceso de su población a las vacunas.
10. Es comprensible que los Estados den cierta prioridad a asegurar el acceso a las vacunas para sus propios ciudadanos primero. No obstante, esta preocupación razonable no debería llevar a una forma de aislacionismo

20 Véase la Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales No. 24 (2017) “sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades Empresariales” Párrafo 11.

21 Véase la Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales No. 24 (2017) “sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades Empresariales” Párrafos 26 y 28.

22 Véase el Artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

23 Véase la Observación General No. 25 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales. Párrafo 82.

sanitario o a una carrera por las vacunas contra la COVID-19 entre los Estados, en las que algunos Estados, especialmente los Estados desarrollados, compiten con otros Estados para llegar a acuerdos costosos y poco transparentes con empresas privadas a fin de asegurar primero las vacunas para todos o la mayoría de sus propios ciudadanos. Esta competencia entre los Estados puede llevar a un aumento en los precios de las vacunas y puede incluso crear un monopolio temporal de acceso a las primeras vacunas producidas para algunos Estados desarrollados, socavando, al menos temporalmente, la posibilidad de que otros países, especialmente los Estados en desarrollo, garanticen el acceso de su población a las vacunas. Esta competencia entre los Estados por las vacunas es contraproducente desde el punto de vista del enfoque de la salud global, ya que hace mucho más difícil y prolongado el control de la pandemia. Mientras una parte importante de la población mundial no tenga acceso a las medidas de control, prevención y tratamiento de la COVID-19 y a sus vacunas, persistirán los riesgos de recrudecimiento de la pandemia. Además, esta competencia por una vacuna es contraria a las obligaciones extraterritoriales de los Estados de evitar tomar decisiones que limiten la oportunidad de otros estados de implementar su derecho a la salud. También da lugar a la obstrucción del acceso a las vacunas por parte de quienes más las necesitan en los países menos desarrollados.²⁴ El carácter confidencial de algunos de estos acuerdos también es contrario al deber de los Estados de establecer mecanismos transparentes que permitan la rendición de cuentas, el escrutinio público y la participación ciudadana en sus decisiones relativas a la asignación de recursos y la aplicación de tecnologías para la realización del derecho a la salud.²⁵

24 Véase la Observación General No. 24 (2017) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades Empresariales”.

25 Véase la Observación General No. 25 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2020) sobre la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales, Párrafo 55. Véase también la Observación General No. 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Párrafo 55.

11. En lugar del aislacionismo sanitario y la carrera por una vacuna, los Estados deben cumplir con sus obligaciones de contribuir al disfrute de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, a nivel mundial.²⁶ La distribución de las vacunas y la priorización en el acceso a ellas deben organizarse y contar con el apoyo de la cooperación y la asistencia internacionales, lo que incluye la distribución de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.²⁷ En consecuencia, los Estados partes deberían elaborar estrategias y mecanismos para una distribución equitativa de los costos financieros relacionados con la investigación, producción y distribución de vacunas contra la COVID-19, incluida la reducción de la carga de la deuda de los países que lo necesiten. También deberían adoptar mecanismos transparentes y participativos que garanticen que la priorización en la distribución mundial de vacunas esté basada, como debería estarlo a nivel nacional, en las necesidades médicas y en consideraciones de salud pública. Este apoyo puede organizarse utilizando la Instalación Mundial de Vacunas COVAX, apoyada por la OMS.

12. Por último, si bien esta declaración se refiere esencialmente al acceso equitativo y universal a las vacunas para COVID-19, el Comité considera que sus principales consideraciones son pertinentes, con los cambios necesarios, en relación con las obligaciones de los Estados de garantizar también el acceso universal y equitativo al tratamiento para la COVID-19. Además, el Comité recuerda a los Estados partes que todas las medidas adoptadas para limitar los derechos económicos, sociales y culturales debido a la pandemia deben cumplir con las condiciones dispuestas en el artículo 4 del Pacto. A este respecto, el Comité recuerda su declaración de abril del 2020 “Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales.”²⁸

26 Véase la Carta de las Naciones Unidas, Artículos 55 y 56. Véase también la Observación General No. 24 (2017) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades Empresariales”.

27 Véase el Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Véase también el compromiso hecho en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS 3).

28 <https://undocs.org/E/C.12/2020/1>



Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia
Calle 35 N° 24-31, Bogotá, D.C.
Teléfono: (57 1) 608 3605
Correo electrónico: info@dejusticia.org
<https://www.dejusticia.org>



Este texto puede ser descargado gratuitamente en <http://www.dejusticia.org>
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Traductor: Carlos Alberto Arenas París.
Diseño: Precolombi EU, David Reyes